MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 13 de marzo de 1970 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 7 de febrero de 1970 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Martínez Fernández y otros.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandantes, don Juan Martínez Fernández, don Juan Díaz Pérez, don Juan Casal Collazo, don Mariano Flores Martín, don José Díaz García, don Carlos Díez Lorenzo, don Pedro Prieto Ruiz, don Vicente Hermoso Ruiz, don Juan Vicéns Verd, don José Ruiz Chiachio, don Felipe Delgado Holgado, don Esteban Martínez López, don Cayetano Vega Suero y don Aurelio Cuesta Cuesta, representados por el Procurador don Antonio Rueda Bautista, bajo la dirección de Letrado, y de otra, como demandada, la Administración Pública representada y defendida por el Abogado del Estado contra resoluciones del Ministerio del Ejército dictadas en el mes de febrero de 1968 que desestimó recursos de reposición formulados contra otras que denegaron a los interesados el ascenso a Tenientes auxiliares se ha dictado sentencia, con fecha 7 de febrero de 1970, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad invocadas por la Abogacía del Estado y estimando en parte los recursos contencioso-administrativos interpuestos por don Juan Martínez Fernández, don Juan Díaz Pérez, don Juan Casal Collazo, don Mariano Flores Martín, don José Díaz García, don Carlos Díez Lorenzo, don Pedro Prieto Ruiz, don Vicente Hermoso Ruiz, don Juan Vicéns Verd, don José Ruiz Chiachio, don Felipe Delgado Holgado, don Esteban Martínez López, don Cayetano Vega Suero y don Aurelio Cuesta Cuesta, contra las resoluciones del Ministerio del Ejército que denegaron sus peticiones de ascenso a Tenientes de la Escala Auxiliar, resoluciones que anulamos y dejamos sin efecto, declarando el derecho de los recurrentes a obtener el ascenso pretendido con efectos de la fecha anterior al 16 de diciembre de 1967 en que para cada uno de ellos se produjera la vacante que debía cubrir, sin hacer pronunciamiento sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido y bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 165 de la Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 3631).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1970.

CASTAÑÓN DE MENA

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 1970 por la que se impone a «Eguía y Zabala, S. L.», la sanción de anulación de la concesión, con incautación de las instalaciones de la estación de servicio número 15.300, de Legorreta (Guipúzcoa), e inmediata reversión al Estado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por CAMPSA a la Entidad «Eguía y Zabala, S. L.», con propuesta de anulación de la concesión que tenía otorgada para la explotación de la estación de servicio número 15.300, sita en Legorreta (Guipúzcoa), e incautación de la misma y su automática reversión a favor del Estado, con abono de su importe, en aplicación del último párrafo del artículo 34 del vigente Reglamento de 30 de julio de 1958, y

Resultando: Que de las actuaciones practicadas se obtiene la conclusión de que resulta plenamente comprobado que en la estación de servicio objeto del expediente existían colocados en los aparatos surtidores mecanismos defraudadores, que se describen detenidamente en las diligencias levantadas para su descubrimiento, habiéndose violado los precintos colocados por la Delegación de Industria en el curso de las actuaciones, haciéndose desaparecer determinados elementos propios de los referidos mecanismos de fraude:

Considerando: Que se han poseído en el expediente los requisitos procesales establecidos en garantía de la Sociedad expedientada, a la que se ha dado traslado del correspondiente pliego de cargos, en observancia del procedimiento sancionador prescrito en el artículo 52 del Reglamento de 30 de julio de 1958, procedimiento de especial aplicación conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de enero de 1968:

Considerando que, antes de entrar en la cuestión de fondo del expediente, conviene tomar en cuenta que, con fecha 26 de enero de 1970, los socios de la Entidad «Eguía y Zabala, Sociedad Limitada» titular de la concesión de la estación de servicio de que se trata, presentan un escrito solicitando la práctica de diversas pruebas, sobre cuya admisibilidad procede pronunciarse expresamente:

Considerando que la referida solicitud de práctica de pruebas debe, en primer lugar, estimarse extemporánea, ya que debió hacerse al contestar el pliego de cargos, trámite que expresamente establece el artículo 52 del Reglamento vigente para la audiencia y defensa del interesado, sin que después de dicho trámite se habilite ningún otro que pueda dar lugar a la admisión de la solicitada, más aun cuando CAMPSA ha formulado ya su propuesta de sanción:

Considerando: Que las pruebas solicitadas en nada habrían de cambiar los hechos probados en el expediente ni de atenuar la sanción que se propone. En efecto, las pruebas testifical y documental tienen por único objeto acreditar que los empleados de la estación de servicio no recibieron queja de los consumidores sobre la medida de los carburantes y que los clientes fijos, de cuyas compras se acompaña una extensa documentación, no notaron faltas de medida estando satisfechos con el servicio. Con ello, se trata de probar que los mecanismos defraudadores descubiertos no llegaron a funcionar, cuando desde luego resulta del expediente que los aparatos surtidores en que estaban instalados tales mecanismos, se mantenían en servicio en el momento en que se practicó la visita de inspección. Para ser más precisos, el hecho de inspeccionar los referidos mecanismos con el propósito de averiguar si debe considerarse causa bastante para que los que así actuaron se vean privados de su concesión, privación que no representa una confiscación de bienes, puesto que al concesionario se le abona el valor de la estación de servicio, como expresamente se prevé al establecer esta sanción. En este sentido, el número segundo del apartado C) del artículo 51 tipifica la falta muy grave que CAMPSA advierte en su propuesta, considerando como tal el hecho de existir defectos en las medidas de los aparatos que superen la tolerancia máxima sin exigir que se pruebe qué cantidades han sido defraudadas, prueba que, en estos casos, habría de resultar siempre muy difícil:

Considerando: Que este mismo precepto de la prueba pericial solicitada, en cuanto se refiere a la determinación de si las piezas trucadas han sufrido o no desgaste, y en cuanto al pretendido coeficiente defraudador del 431 por 100, el mismo resulta del auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción de Tolosa contra don Juan Antonio Eguía Osorio y don Pedro María Zabala Zabala, sin que haya sido tomado en cuenta en este expediente que se instruye con carácter puramente administrativo, y en el que, como antes se ha dicho, no es necesario acreditar las cantidades realmente defraudadas. En virtud de ello se estima que procede acordar la inadmisibilidad de las pruebas solicitadas mediante el escrito presentado en la Delegación del Gobierno el 26 de enero de 1970 por ser su proposición extemporánea y porque su resultado carece de valor para la resolución que haya de dictarse, ya que para que se produzca la falta que ha de sancionarse es suficiente que existan los defectos en las medidas de los aparatos, sin que sea preciso justificar las cantidades totales que se hayan defraudado:

Considerando: Que una vez resuelto este problema previo procede entrar a examinar los hechos que han sido objeto del procedimiento, significando que en el resultado de la presente Orden ya constan los referidos hechos, y que las alegaciones de la Entidad expedientada consisten en atribuir el acoplamiento de los dispositivos a un mecánico desconocido, quien manifestó que dichos elementos se destinaban a compensar las mermas de carburantes por cambios de temperatura y evaporación, siendo este mecánico el que, una vez retirados los inspectores, procedió a efectuar las operaciones que creyó conveniente. Tales alegaciones en modo alguno pueden ser admitidas como exculpatorias, ya que no existe prueba alguna de la existencia de la referida persona que, en todo caso hubo de colocar los dispositivos descubiertos con el consentimiento de la Sociedad titular de la estación de servicio previniendo, además, el artículo sexto, párrafo último, del Reglamento de 30 de julio de 1958, que la CAMPSA no reconoce personalidad más que a los titulares nombrados o autorizados para la venta, siendo éstos los responsables de toda infracción:

Considerando: Que los hechos probados se califican como falta muy grave en el número segundo del apartado C) del artículo 51 del Reglamento citado, en donde se sanciona la existencia de defectos en las medidas de los aparatos que superen la tolerancia máxima que establezcan las normas que regulan las pesas y medidas, hallándose dichos aparatos desprecintados; debiendo tomarse en cuenta a este propósito la resolución de este Ministerio de 1 de febrero de 1969 en un supuesto análogo al que ahora se examina, resolución expresamente recogida en

la propuesta de CAMPSA, en la que se razona que el precio de los aparatos surtidores constituye una garantía de normal caudal en cuanto al defecto de medidas, pues sin violentario es posible que el defecto obedezca a un error no corregido del aparato medidor, en tanto que el desprecinto entraña una acción violenta y decidida para provocar la defraudación; circunstancia que concurre en el caso enjuiciado en el presente expediente al eludir el desprecinto con el montaje de ingeniosos mecanismos que permiten llevar a cabo el mismo engaño, sin fácil descubrimiento, destacando así mayor peligrosidad en el Agente y para los intereses de los consumidores.

Considerando: Que a las faltas de este carácter corresponden, según el artículo 52 del vigente Reglamento sanción de multa comprendida entre 50.001 y 250.000 pesetas, o la anulación de la concesión, siendo competencia de este Departamento ministerial la fijación de la sanción correspondiente.

Considerando: Que habida cuenta de la gravedad de los hechos CAMPSA propone se imponga a la Empresa «Eguía y Zabala, S. L.» la sanción de anulación de la concesión, con incautación de las instalaciones de la estación de servicio número 15.300, sita en Legorreta (Guipúzcoa), e inmediata reversión a favor del Estado, abonándose su importe al concesionario en la forma que señala el último párrafo del artículo 34 del vigente Reglamento.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, ha resuelto:

1.º Inadmisibilidad de las pruebas solicitadas por «Eguía y Zabala, S. L.», por ser su petición extemporánea y por carecer su resultado de valor para la resolución pertinente.

2.º Imponer a «Eguía y Zabala, S. L.» la sanción de anulación de la concesión, con incautación de las instalaciones de la estación de servicio número 15.300, de Legorreta (Guipúzcoa), e inmediata reversión a favor del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1970

MONREAL LUQUE

Ilmo Sr Delegado del Gobierno en la Renta de Petróleos

RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación por la que se hace pública relación de Centros asistenciales reconocidos a efectos del Seguro Obligatorio del Automóvil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23, apartado a), del Reglamento del Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor de 19 de noviembre de 1964, modificado por Decreto 1199/1965, de 8 de mayo, este seguro comprende, entre otras prestaciones, la total asistencia médica y hospitalaria si ésta se produce en uno de los Centros sanitarios reconocidos por el Fondo Nacional de Garantía, o hasta un máximo de 30.000 pesetas para satisfacer conjunta y proporcionalmente dichos gastos si no se utilizan tales Centros.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero de 1968, 13 de febrero de 1967, 30 de julio de 1968 y 19 de febrero de 1969 se publicaron las listas de los Centros reconocidos hasta entonces.

Con posterioridad a dichas fechas ha sido otorgado el reconocimiento por este Organismo a los siguientes:

1. Hospital Municipal, Carretera de Ocaña a Alicante, Elda (Alicante).
2. Hospital Provincial de San Sebastián, Plaza de Minayo, 2 Badajoz.
3. Hospital Municipal de Nuestra Señora del Mar, Plaza de Pons y Freixa, s/n, Barcelona.
4. Hospital de San Bernabé Doctor Saló, 6, Berga (Barcelona).
5. Hospital de Santa María y San José, Hermano Julio, sin número, Badalona (Barcelona).
6. Hospital Municipal de San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, 2, Mérida (Badajoz).
7. Hospital Provincial Médico-Quirúrgico, Madrid, 33-43, Burgos.
8. Hospital Provincial (Beneficencia) Obispo Laso, 23, Plasencia (Cáceres).
9. Hospital Mora Provincial, Avenida Primo de Rivera, Cádiz.
10. Hospital Municipal Teniente Miranda, 116, Algeciras (Cádiz).
11. Hospital Municipal, Avenida Menéndez Pelayo, 133, La Línea (Cádiz).
12. Hospital Provincial, Avenida Doctor Clará, 19, Castellón de la Plana.
13. Casa de Socorro y Hospital Municipal, Ricardo Cabañero, 9, Puertollano (Ciudad Real).
14. Hospital Municipal de San Francisco, León Manuel Valdepeñas (Ciudad Real).
15. Hospital de Jesús Nazareno Salazar, 8, Montoro (Córdoba).
16. Hospital Municipal Modesto Carmona, 4, Puente Genil (Córdoba).
17. Hospital Provincial de Agudos Plaza Cardenal Salazar, 1, Córdoba.
18. Hospital Provincial, Caleras, Santa Isabel Santiago de Compostela (La Coruña).
19. Hospital Particular, Calle Florenza, 30, Puigcerdá (Gerona).
20. Hospital de San Jaime, San Rafael, 21, Olot (Gerona).
21. Hospital Provincial Ortiz de Zárate, Madrid, 30, Guadaluajara.
22. Hospital Provincial de Guipúzcoa, Ciudad Sanitaria San Sebastián.
23. Hospital Médico-Quirúrgico Provincial Paseo de Lucas Mallada, 12, Huesca.
24. Hospital Corpus Christi, Carmen, 15, Cazoria (Jaén).
25. Hospital Provincial, Avenida de Viana, s/n, Logroño.
26. Hospital Municipal de la Alcaldesa, Alarcón, 9, El Escorial (Madrid).
27. Hospital Municipal de San Carlos, Calle de la Concha, 10, Aranjuez (Madrid).
28. Clínica de Urgencia y Hospital Municipal, Misericordia, 2, Marbella (Málaga).
29. Hospital Municipal, San Juan de Dios, 1, Vélez-Málaga (Málaga).
30. Hospital Provincial de Murcia Avenida General Moscardó, 1, Vistabella (Murcia).
31. Hospital de Navarra, Barañain, s/n, Pamplona.
32. Hospital Provincial, Calle Lonia, s/n, Orense.
33. Hospital General de Asturias, Julián Claverías, sin número, Oviedo.
34. Hospital Municipal de Pravia, Avenida Santiago López, Pravia (Asturias).
35. Hospital Médico-Quirúrgico «San Telmo», Avenida de San Telmo, Palencia.
36. Hospital de San Roque, Cuesta de Caraballo, 1, Guía de Gran Canaria (Las Palmas).
37. Hospital de San Martín, Ramón y Cajal, 1, Las Palmas.
38. Gran Hospital Provincial, Doctor Loureiro, s/n, Pontevedra.
39. Hospital Municipal Regueiro, 2, Vigo (Pontevedra).
40. Hospital Provincial y Clínico, García Tejano, 2, Salamanca.
41. Hospital Municipal de San Pedro, San Pedro, 1, Carmona (Sevilla).
42. Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes General Franco, 104, Osuna (Sevilla).
43. Hospital de San Juan San Juan, s/n, Reus (Tarragona).
44. Hospital Provincial de Alcañiz, Juan Sobrarias, 2, Alcañiz (Teruel).
45. Hospital Municipal de Santa Lucía, Onda, s/n, Alrcra (Valencia).
46. Santo Hospital Civil del Generalísimo, Avenida de Montevideo, s/n, Bilbao.
47. Hospital Provincial (Residencia Sanitaria Rodríguez Chamorro), Campo de los Cascajos, Zamora.
48. Hospital Municipal, Avenida de San Juan, 4, Calatayud (Zaragoza).
49. La Alianza Mataronense, Lepanto, 13, Barcelona.
50. Quinta de la Salud La Alianza, Plaza de los Mártires, 2, Sabadell (Barcelona).
51. Quinta de la Salud La Alianza, Plaza M. Raventós, sin número, San Sadurní de Noya (Barcelona).
52. Hospital Asilo de Granollers, Avenida Francisco Rivas, sin número, Granollers (Barcelona).
53. Clínica Médico-Quirúrgica Doctor Frontela, Virgen de los Milagros, 12, Puerto de Santa María (Cádiz).
54. Clínica de San Sebastián, Pilar, 154, Vinaroz (Castellón).
55. Centro Sanitario de Recuperación San Juan de Dios, Carretera de Caboalles, kilómetros 2, León.
56. Sanatorio Virgen de Guadalupe, Arjona, 3, Uheda (Jaén).
57. Quinta de Salud La Alianza, Carretera de Andorra, sin número, Seo de Urgel (Lérida).
58. Quinta de Salud La Alianza, Plaza Hospital, s/n, Trem (Lérida).
59. Quinta de Salud La Alianza, Viella (Lérida).
60. Clínica Quirúrgica Julio García Vázquez, Avenida de La Habana, 59, 1.º Orense.
61. Clínica del Doctor José Manuel Iglesias Rapariz, Avenida de Buenos Aires, 54, Lalín (Pontevedra).
62. Sanatorio Infantil de Santa Clotilde, Avenida General Dávila, 35, Santander.
63. Instituto Médico-Quirúrgico Cruz Roja Española, Avenida María Cristina, 17, Tarragona.
64. Clínica del Doctor Mut, Pintor Sorolla, 13, Gandía (Valencia).
65. Centro Sanitario Municipal, Avenida Navarro Reverter, 11, Valencia.
66. Sanatorio San José, Angel Molina, 20, Medina del Campo (Valladolid).
67. Quinta de Salud La Alianza, Ronda de Camprodón, sin número, Vich (Barcelona).
68. Policlínica Médico-Quirúrgica Nuestra Señora del Carmen, Avenida del Pilar, 1-3, Calahorra (Logroño).